

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO que señala que se reforman los artículos 8o., fracción VI; 16, fracciones VI, inciso b) y VII; 32, párrafo segundo; 50, fracción III; 81, primer párrafo y fracción V; 82, primer párrafo; 83, 86, 92, tercer párrafo; 107, y 108, así como la denominación del Capítulo VII del Título Quinto; se adiciona un segundo párrafo al artículo 82 y, se derogan los artículos 3o., fracción XXI; 7o., fracción VIII; 8o., fracción XVII; 80; 84, y 85 de la Ley General de Cambio Climático.”

SEGUNDO. Derechos fundamentales. La moral quejosa puntualizó que no existe tercero interesado; indicó como derechos violados, los reconocidos en los artículos 1º, 4º, 5º, 14, 16, 29, 73, 113 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado y formuló los conceptos de violación que estimó conducentes.

TERCERO. Admisión. El ***** ** ***** ** ** ** ***** se registró la demanda bajo el expediente *****; se admitió a trámite; se requirió a las autoridades responsables su informe justificado; se dio participación al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se señaló día y hora para la audiencia constitucional.

CUARTO. Suspensión de plazos. Atendiendo al contenido de las Circulares **SECNO/29/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/8/2021, SECNO/9/2021 y SECNO/10/2021**, emitidas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del Primer Circuito se ordenó paulatinamente la suspensión de plazos y términos desde el **cinco de diciembre** de dos mil **veinte** hasta el **diecisiete de febrero** de dos mil **veintiuno**.

Así pues, en las circulares de referencia se puntualizó que durante ese periodo se retomarían los lineamientos establecidos en el Acuerdo General 13/2020, emitido por el Pleno del propio Consejo, teniendo como excepción las demandas urgentes y aquellas promovidas a través del juicio en línea, por conducto del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal, como aconteció en el presente asunto.

QUINTO. Acuerdo de reserva. No obstante, el dieciocho de enero de dos mil veinte, se reservó proveer lo conducente respecto del informe justificado presentado por el Presidente de la República, ya que de una revisión al expediente se advirtió que no todas las autoridades responsables contaban con firma electrónica y se consideró que no se reunían los requisitos para dar continuidad de manera electrónica.

SEXTO. Acuerdo de reanudación. El primero de marzo de dos mil veintiuno se reanudó el procedimiento a que este expediente se refiere; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inicia en términos del acta que antecede y que concluye con el dictado de la presente resolución; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer del juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, párrafo tercero de la Ley de Amparo; 52, fracción III,¹ de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el punto cuarto, fracción I, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama la regularidad constitucional de una norma general como autoaplicativa.²

¹ Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, **abrogada** mediante decreto publicado en idéntico medio de difusión oficial el siete de junio de dos mil veintiuno y que resulta aplicable para los asuntos iniciados bajo su vigencia, en términos de lo dispuesto por el artículo quinto transitorio cuyo texto es: "Quinto. Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán tramitándose hasta su resolución final de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio".

²Es aplicable por **analogía** la Jurisprudencia 2a. 11, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, Materia Común, Constitucional, página: 193. Registro: 206498. El texto y rubro es el siguiente: "**LEYES FEDERALES AUTOAPLICATIVAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA JURISDICCION EN EL LUGAR EN QUE LOS DESTINATARIOS DEBAN ACATARLAS.** El hecho de que una ley autoaplicativa tenga como característica la de obligar al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer, desde el momento en que entra en vigor, sin requerir de un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad, de ninguna manera puede servir de base para que se le identifique con las resoluciones a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es decir, con aquellas que, por no requerir ejecución material, deben ser conocidas por el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que las dictó, pues es evidente que una ley federal autoaplicativa constituye un acto de sentido amplio que sí amerita ejecución material precisamente en los lugares en los que los gobernados deban dar cumplimiento a sus prescripciones. La circunstancia de que no se requiera un acto posterior de autoridad para que tales leyes adquieran obligatoriedad, no debe conducir a la errónea conclusión de que no necesitan ejecución material, pues las personas que, al momento de la vigencia de la norma, queden automáticamente comprendidas dentro de las hipótesis de su aplicación, deben proceder, por propia iniciativa o como consecuencia de una posterior decisión de autoridad, a acatar sus mandatos".



DEL MISMO DÍA EN QUE ENTRAN EN VIGOR.”⁴ y “LEYES AUTOAPLICATIVAS. CUANDO EL PLAZO PARA IMPUGNARLAS INICIA EN DÍA INHÁBIL, NO DEBE CONTARSE ÉSTE”.⁵

TERCERO. Precisión de los actos reclamados. A fin de dar cumplimiento al derecho fundamental de tutela judicial que prevé el segundo párrafo del artículo 17 constitucional,⁶ la *litis* constitucional se fija atendiendo al estudio integral de la demanda de amparo y elementos probatorios, conforme a las tesis P./J. 40/2000,⁷ 2a./J. 183/2005,⁸ P./J. 35/2001⁹ y la diversa con registro digital: 239099.¹⁰

En ese contexto, con apoyo en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo¹¹ se precisan los actos reclamados:

⁴ Registro: 194.893, Tesis aislada, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, diciembre de 1998, Tesis: P. CIX/98, Página: 251.

⁵ Novena Época, Registro: 193923, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Mayo de 1999, Tesis: 2a. LXI/99, Página: 506.

⁶ “Artículo. 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. (...)”.

⁷ “**DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.** Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo”. Novena Época, Registro digital: 192097, Instancia: Pleno, Tipo: Jurisprudencia, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Materia(s): Común, Página: 32.

⁸ “**DEMANDA DE AMPARO. AL PROVEER SOBRE SU ADMISIÓN, SU ANÁLISIS DEBE COMPRENDER LOS ANEXOS QUE SE ACOMPAÑEN A LA MISMA.** Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la demanda de amparo debe ser interpretada en forma integral, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal; el desarrollo de este criterio permite considerar que el estudio integral de la demanda incluye el de los anexos de la misma, en virtud de que éstos generalmente contienen datos que completan el entendimiento de la demanda, cuando es oscura o imprecisa; así, los anexos pueden permitir al Juez esclarecer su contenido y desentrañar la verdadera voluntad del quejoso, lo que encuentra su apoyo en los principios que para la administración de justicia prevé el artículo 17 de la Constitución General de la República. Por ende, en los casos en que del análisis integral de la demanda y sus anexos, el Juez advierta alguna irregularidad o imprecisión, debe prevenir a la parte quejosa en términos de lo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que formule la aclaración correspondiente, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que podría trascender al resultado de la sentencia, por lo que con apoyo en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, llevaría a ordenar la reposición del procedimiento.” Novena Época, Registro digital: 176329, Instancia: Segunda Sala, Tipo: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, Materia(s): Común, Página: 778.

⁹ “**DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA.** Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento”. Novena Época, Registro digital: 189979, Instancia: Pleno, Tipo: Jurisprudencia, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Materia(s): Común, Página: 32.

¹⁰ “**ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACION SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD.** Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos”. Séptima Época, Registro digital: 239099, Instancia: Segunda Sala, Tipo: Jurisprudencia, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Abril de 2001, página 79. Materia(s): Común.

¹¹ “74. La sentencia debe contener:

I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; (...)”.

DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN”.¹²

Así como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación¹³, que dispone: “**LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA**”.

QUINTO. Antecedentes. Para mejor comprensión del asunto, resulta conveniente resaltar que de las constancias que conforman el presente juicio, documentales a las que se les concede valor probatorio pleno atento a lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del ordenamiento legal supletorio en la materia, se desprenden los siguientes hechos y antecedentes:

1. Por instrumento notarial ***** * ***** ** ***** ***** , de ***** * ***** ** * ***** ***** ***** * **** , se constituyó ***** ***** ** ***** ***** ***** ***** , cuyo objeto preponderante es llevar a cabo todo tipo de labores de investigación científica en el área jurídico-ambiental; promover la preservación de la flora o fauna silvestre, terrestre o acuática dentro de las áreas naturales protegidas; promover entre los distintos sectores de la población la conciencia necesaria para la apropiada prevención y el control de la contaminación, del agua, aire y suelo; la protección del medio ambiente y la preservación y la restauración del equilibrio ecológico.

2. El ***** ** ***** ** ** * ***** se presentó en la Comisión Permanente una iniciativa en la que se propusieron modificar catorce leyes y abrogar una, para liquidar cuarenta y cuatro fideicomisos.

3. El ***** ** ***** ***** ** * ***** , el coordinador parlamentario del partido político denominado como Movimiento Regeneración Nacional, en la Cámara de Diputados, anunció que se buscarían extinguir cincuenta y cinco fideicomisos y, para ello, presentó una iniciativa adicional.

¹²Jurisprudencia de la novena época, con número de registro 191452, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de 2000, página 260, aplicable en términos del sexto transitorio de la Ley de Amparo, por no contradecir las disposiciones vigentes de dicha ley, del siguiente texto: “Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo”.

¹³ Volumen 65, Primera Parte, Materia Común, página 15, Séptima Época, con registro 233090.

HAYDEELIANA ARGÜET A RODRÍGUEZ
70.6a.6a.30.63.6a.6a.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c5.16
01/07/23 09:47:36



JUICIO DE AMPARO 1200/2020

4. El **** ** ***** ** ** ** ***** fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo; de la Ley de Hidrocarburos; de la Ley de la Industria Eléctrica; de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; de la Ley General de Protección Civil; de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; de la Ley de Ciencia y Tecnología; de la Ley Aduanera; de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario; de la Ley General de Cultura Física y Deporte; de la Ley Federal de Cinematografía; de la Ley Federal de Derechos; de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo; de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados; de la Ley General de Cambio Climático; de la Ley General de Víctimas y se abroga la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos”.

El decreto precisado en último término, constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo.

SIXTO. Análisis de las causas de improcedencia y sobreseimiento. Previamente al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las propongan las partes, o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo.

❖ **No cuenta con interés legítimo.**

Al respecto, el **Presidente de la República** aduce que en el caso se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo **61**, fracción **XII**,¹⁴ de la Ley de Amparo, porque a su parecer la sociedad quejosa carece de interés legítimo para promover este juicio, pues aún y cuando del instrumento notarial exhibido por la asociación quejosa se advierte su

¹⁴ “61. El juicio de amparo es improcedente:

(...)

XII. *Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.”*

objeto social, no demuestra formar parte de algún fideicomiso cuyos recursos pretende sean tutelados mediante la promoción de este juicio.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 111/2013, estableció las **notas distintivas del interés legítimo** previsto en la fracción I del artículo 107 constitucional, conforme a lo siguiente:

1. Implica la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso.

2. El vínculo no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, la persona con interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante.

3. Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple. Es decir, implica el acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En otras palabras, debe existir un vínculo con una norma jurídica, pero basta que la misma establezca un derecho objetivo, por lo que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción.

4. La concesión del amparo, se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, mismo que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse.

5. Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida.

6. Así, el quejoso tiene un interés propio distinto del de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de



Ahora bien, dada la naturaleza del derecho al medio ambiente, si bien el artículo 4 de la Constitución no le otorga a las asociaciones facultad para llevar a cabo esta labor, lo cierto es que sí existe un agravio diferenciado respecto del resto de los integrantes de la sociedad, en virtud de que es una asociación que fue constituida para la defensa de ese derecho, lo que le otorga la facultad específica a este tipo de asociaciones para intervenir en el ejercicio de este derecho.

En ese aspecto, no pasa inadvertido que la asociación, así como cualquier ciudadano tienen la posibilidad de aducir una defensa al derecho al medio ambiente de manera abstracta, como un interés genérico; sin embargo, se estima que la asociación cuenta con una característica diferenciada, porque su objeto social está encaminado a realizar actos a fin de acceder a un derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, como el tutelado en el artículo 4 de la Constitución Federal.

Así, la pretensión que se plantea en el presente juicio de amparo no se refiere sólo a la defensa abstracta del derecho al medio ambiente, sino que se trata de una defensa específica que se encuentra estrechamente relacionada con el objeto para el cual fue constituida, por lo que impedir el acceso al juicio de amparo, a su vez impediría que la asociación cumpliera con uno de los fines para la que fue creada; motivo por el cual, aun cuando en cierto punto el interés del ciudadano y el de la asociación pudieran coincidir, ya que ambos tendrían un interés simple para verificar que las autoridades cumplan con sus obligaciones, también es cierto que el agravio diferenciado se actualiza, en virtud de la naturaleza del derecho al medio ambiente y la protección del objeto social de la quejosa.

Aunado a ello, al no permitir el cuestionamiento de los actos de las autoridades en el juicio de amparo, se estaría incumpliendo con el deber de respeto impuesto en el artículo 1 constitucional, relativo a no obstaculizar el acceso al ejercicio del derecho, en virtud de que la asociación se encuentra vinculada de manera específica al derecho al medio ambiente, pues para lograr la efectividad de este derecho se requiere de la interacción entre el Estado y los particulares.

De esa forma, se estima que en el caso se actualiza el supuesto previsto en el artículo 107, fracción I, constitucional, ya que en el caso la



especulativo sobre una posible violación de derechos, para determinar la eficacia para restaurar el orden constitucional que se alega violado, es decir, debe llevarse a cabo un análisis conjunto del derecho que se aduce transgredido, a la luz del acto de autoridad y la afectación, con la finalidad de determinar si la autoridad responsable está en posibilidad de repararla.²³

Asimismo, el artículo 17 constitucional establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

De lo antes dicho, es factible concluir que todas las personas reconocidas por el ordenamiento mexicano tienen la posibilidad de acudir al juicio de amparo para defender los derechos reconocidos por la Constitución; motivo por el cual la técnica rectora del juicio de garantías permite que, antes de examinar el fondo de un asunto, se anticipe cuál será el efecto de una eventual sentencia que conceda el amparo solicitado, ya que carecería de lógica y sentido práctico emprender el análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, si de antemano se prevé que exista un obstáculo que impida la restitución en el goce del derecho violado.

Así, con base en los parámetros fijados es posible fijar efectos a una eventual concesión (en atención a la naturaleza del acto reclamado y la acción ejercida) pues se trata del derecho al medio ambiente y respecto del mismo se reclama el incumplimiento de diversas facultades contenidas de forma expresa en la ley, por lo que el objeto del juicio será verificar si las autoridades cumplieron con dichas facultades, pues de lo contrario una eventual concesión del amparo tendrá por efecto obligarlas a realizar dichos actos en respeto al derecho aludido.

²³ En similar sentido se pronunció la Segunda Sala en la Jurisprudencia 2a./J. 35/2012 (10a.)Segunda Sala, de rubro y texto: **“IMPROCEDENCIA. SE ACTUALIZA EN EL JUICIO DE AMPARO SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LOS EFECTOS DE UNA EVENTUAL SENTENCIA PROTECTORA PROVOCARÍAN LA TRANSGRESIÓN DE SUS NORMAS O PRINCIPIOS RECTORES. La técnica del juicio de amparo permite que, antes de examinar el fondo de un asunto, se anticipe el efecto de la eventual concesión de la protección constitucional en favor del quejoso, y así prever si la restitución en el goce del derecho violado resultaría alcanzable, pues carecería de lógica y sentido práctico analizar el acto reclamado, si de antemano se advierte que la declaración de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad. El fundamento de este proceder se apoya, por regla general, en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con otras normas de ese mismo ordenamiento o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo enlace armónico ofrece una variedad de causas de improcedencia que impiden el dictado de sentencias estimatorias cuyo cumplimiento fuera inaccesible. En esos términos, si a partir de un ejercicio de previsibilidad sobre los efectos de una eventual sentencia protectora, el juzgador advierte que la restitución del derecho provocaría la infracción de normas o principios rectores del juicio de amparo, entonces la acción intentada resulta improcedente por dictar una sentencia carente de ejecutividad, porque el restablecimiento citado llegaría al extremo de desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y, por ende, a la regularidad constitucional que busca preservar.”**



la constitucionalidad del artículo que por esta vía controvierte la quejosa, en términos de los conceptos de violación que se exponen en la demanda.

SÉPTIMO. Estudio de fondo. Por cuestión de técnica los conceptos de violación se analizarán en un orden distinto al propuesto.

La asociación quejosa en su **segundo concepto de violación** afirma que con la emisión del decreto reclamado se transgrede el principio de seguridad jurídica, por no haberse seguido las formalidades esenciales del procedimiento legislativo establecido en el artículo 72 Constitucional.²⁴

Pues bien, el Poder Legislativo mexicano encuentra cabida en la figura del Congreso General —conformado por la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores—, el cual es el órgano responsable, a través del procedimiento legislativo, de producir las normas legales que expresan la

²⁴ "72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones:

A.- Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente.

B.- Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción; vencido este plazo el Ejecutivo dispondrá de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el Presidente de la Cámara de origen ordenará dentro de los diez días naturales siguientes su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo. Los plazos a que se refiere esta fracción no se interrumpirán si el Congreso cierra o suspende sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse a la Comisión Permanente.

C.- El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto, con sus observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta., (sic) y si fuese confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, pasará otra vez a la Cámara revisora. Si por esta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación.

Las votaciones de ley o decreto, serán nominales.

D.- Si algún proyecto de ley o decreto, fuese desechado en su totalidad por la Cámara de revisión, volverá a la de su origen con las observaciones que aquella le hubiese hecho. Si examinado de nuevo fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración, y si lo aprobare por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A; pero si lo reprobare, no podrá volver a presentarse en el mismo período de sesiones.

E.- Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o adicionado por la Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo, para los efectos de la fracción A. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fueren reprobadas por la mayoría de votos en la Cámara de su origen, volverán a aquella para que tome en consideración las razones de ésta, y si por mayoría absoluta de votos presentes se desecharen en esta segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas Cámaras, se pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A. Si la Cámara revisora insistiere, por la mayoría absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente período de sesiones, a no ser que ambas Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto sólo con los artículos aprobados, y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes.

F.- En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación.

G.- Todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado en la Cámara de su origen, no podrá volver a presentarse en las sesiones del año.

H.- La formación de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos Cámaras, con excepción de los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados.

I.- Las iniciativas de leyes o decretos se discutirán preferentemente en la Cámara en que se presenten, a menos que transcurra un mes desde que se pasen a la Comisión dictaminadora sin que ésta rinda dictamen, pues en tal caso el mismo proyecto de ley o decreto puede presentarse y discutirse en la otra Cámara.

I (SIC).- El Ejecutivo de la Unión no puede hacer observaciones a las resoluciones del Congreso o de alguna de las Cámaras, cuando ejerzan funciones de cuerpo electoral o de jurado, lo mismo que cuando la Cámara de Diputados declare que debe acusarse a uno de los altos funcionarios de la Federación por delitos oficiales.

Tampoco podrá hacerlas al Decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias que expida la Comisión Permanente".

origen con las observaciones que aquélla le hubiese hecho. Si una vez examinado fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes de la cámara de origen, pasará a la cámara revisora, que lo desechó, la cual deberá volverlo a tomar en consideración y si lo aprobare por la misma mayoría se pasará a la siguiente etapa del procedimiento legislativo. Pero, en caso contrario, si la cámara revisora lo volviera a rechazar, dicha iniciativa de ley no podrá presentarse nuevamente en el mismo periodo de sesiones.

3) Si no se presentará ninguno de los dos supuestos anteriores y un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, modificado, o adicionado por la cámara revisora; la discusión de la cámara de origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la cámara revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes en la cámara de origen se pasará a la siguiente fase del procedimiento legislativo.

Si por el contrario, las reformas o adiciones, elaboradas por la cámara revisora, fuesen rechazadas por la mayoría de los votos en la cámara de origen, la iniciativa volverá a aquélla para que considere las razones expuestas por ésta, y si por mayoría absoluta de los votos presentes, en la cámara revisora se desecharen en esta segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto en lo que haya sido aprobado por ambas cámaras se someterá a la siguiente fase.

Si la cámara revisora insistiere, por la mayoría absoluta de los votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente periodo de sesiones, a no ser que ambas cámaras acuerden, por mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto sólo con los artículos aprobados y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes.

Una vez aprobado el proyecto de ley o decreto por la Cámara de Diputados y la de Senadores, se comunicará al Ejecutivo, firmado por los presidentes de cada una de las cámaras. En este momento corresponde al Presidente de la República manifestar su acuerdo sancionando la ley y



Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo; de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados; General de Cambio Climático; General de Víctimas; y se abrogan las Leyes que Crean el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos; y el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.

(...)"

En dicha sesión el dictamen se aprobó en lo general, con 242 votos a favor, 178 votos en contra y 7 abstenciones; dando inicio a la discusión y análisis en lo particular de las propuestas de modificación.

Hecho lo anterior, aprobado el proyecto por la Cámara de Diputados fue enviada a la Cámara de Senadores, quien el veinte de octubre de dos mil veinte, sometió a discusión del Pleno el Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.²⁷ El Dictamen fue votado en lo general y en lo particular, razón por la que fue aprobado y remitido al ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial.

Lo reseñado revela que el proceso legislativo se llevó a cabo en sus etapas fundamentales, dispuestas en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que necesariamente conlleva la participación de los partidos políticos con representación en el Congreso de la Unión, finalizando con la deliberación y aprobación del Decreto reclamado.

Luego, con relación al argumento tendente a cuestionar que la Mesa Directiva del Senado fue omisa en enmendar una pluralidad de vicios procedimentales y que con ello, faltó a la facultad que le otorga el artículo 66 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;²⁸ al respecto, este juzgador estima que tal aserto no

²⁷ https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/

²⁸ *ARTICULO 66.

1. La Mesa Directiva observará en su desempeño los principios de legalidad, imparcialidad y objetividad y tendrá las siguientes facultades:

a) Presidir los debates y votaciones del Pleno y determinar el trámite de los asuntos, conforme a la Constitución, a esta Ley y al Reglamento correspondiente;



JUICIO DE AMPARO 1200/2020

puede considerarse un verdadero motivo de disenso toda vez que **no explica en qué** consiste la falta a la pluralidad de vicios procedimentales, por ende, deben calificarse como **inoperante**.

Cobra vigencia la jurisprudencia 1a./J. 81/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:²⁹

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTE SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN

- b) Formular y cumplir el orden del día para las sesiones, el cual distinguirá claramente los asuntos que requieran votación de aquellos otros solamente deliberativos o de trámite, tomando en cuenta las propuestas de la Junta de Coordinación Política y de los senadores, de conformidad con las disposiciones reglamentarias;
- c) Incorporar en el orden del día de la siguiente sesión del Pleno las iniciativas o minutas con carácter de preferente para su discusión y votación, en el caso de que las comisiones no formulen el dictamen respectivo dentro del plazo de treinta días naturales
- d) Asegurar que los dictámenes, acuerdos parlamentarios, mociones, comunicados y demás escritos, cumplan con las normas que regulan su formulación y tiempos de presentación;
- e) Designar las comisiones de cortesía necesarias para cumplir con el ceremonial;
- f) Conducir las relaciones de la Cámara de Senadores con la otra Cámara, los otros Poderes de la Unión, los Poderes de las entidades federativas; así como la diplomacia parlamentaria, designando para tal efecto a quienes deban representar a la Cámara en eventos de carácter internacional;
- g) Disponer que la información del trabajo de los senadores sea difundida a los medios de comunicación en condiciones de objetividad y equidad;
- h) Presentar al Pleno para su aprobación el proyecto de presupuesto anual de egresos de la Cámara, que le presente la Comisión de Administración, para su remisión al Titular del Poder Ejecutivo Federal a fin de que sea integrado al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación; así como los presupuestos mensuales de la propia Cámara. En los recesos, el Presidente de la Mesa tomará el presupuesto mensual al Presidente de la Comisión Permanente para los efectos legales conducentes;
- i) Asignar los recursos humanos, materiales y financieros, así como los locales que correspondan a los grupos parlamentarios;
- j) Elaborar y proponer al Pleno los ordenamientos que regulen la organización de las secretarías generales, la Tesorería y el Servicio Civil de Carrera. La adopción de esos instrumentos se regirá, en lo conducente, por las reglas y procedimientos establecidos para la aprobación de leyes y decretos;
- k) Organizar y supervisar las funciones a cargo de las secretarías generales, la Tesorería, el servicio civil de carrera y crear las unidades administrativas que requiera la Cámara;
- l) Expedir el nombramiento o el oficio de remoción de los servidores públicos de la Cámara, mandos medios y superiores, acordados mediante los procedimientos señalados en esta Ley, las disposiciones reglamentarias y los acuerdos aplicables; y
- m) Las demás que se deriven de esta Ley o del Reglamento.

Las facultades que se precisan en los incisos a), d), e), f), g), h) y l), serán ejercidas por el Presidente de la Mesa Directiva.

Las facultades que se precisan en los incisos b), c), i), j) y k), serán ejercidas de manera colegiada, por acuerdo de la mayoría absoluta de los miembros presentes de la Mesa Directiva. En caso de empate, el Presidente de la misma tendrá voto de calidad. Para sesionar válidamente deberán asistir más de la mitad de sus integrantes”.

²⁹ Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo XVI, Diciembre de 2002, página 61, Materias(s): Común. Registro digital: 185425.

Véase también la jurisprudencia (V Región)2o. J/1 (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III, página 1683. Materias(s): Común. Registro digital: 2010038; cuyo rubro y texto son: **“CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. QUE DEBE ENTENDERSE POR “RAZONAMIENTO” COMO COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR PARA QUE PROCEDA SU ESTUDIO**. De acuerdo con la conceptualización que han desarrollado diversos juristas de la doctrina moderna respecto de los elementos de la causa petendi, se colige que ésta se compone de un hecho y un razonamiento con el que se explique la ilegalidad aducida. Lo que es acorde con la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que la causa de pedir no implica que los quejosos o recurrentes pueden limitarse a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a ellos corresponde (salvo en los supuestos de suplencia de la deficiencia de la queja) exponer, razonadamente, por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurrentes; sin embargo, no ha quedado completamente definido qué debe entenderse por razonamiento. Así, conforme a lo que autores destacados han expuesto sobre este último, se establece que un razonamiento jurídico presupone algún problema o cuestión al cual, mediante las distintas formas interpretativas o argumentativas que proporciona la lógica formal, material o pragmática, se alcanza una respuesta a partir de inferencias obtenidas de las premisas o juicios dados (hechos y fundamento). Lo que, trasladado al campo judicial, en específico, a los motivos de inconformidad, un verdadero razonamiento (independientemente del modelo argumentativo que se utilice), se traduce a la mínima necesidad de explicar por qué o cómo el acto reclamado, o la resolución recurrida se aparta del derecho, a través de la confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable (de modo tal que evidencie la violación), y la propuesta de solución o conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas (hecho y fundamento). Por consiguiente, en los asuntos que se rigen por el principio de estricto derecho, una alegación que se limita a realizar afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones no demostradas, no puede considerarse un verdadero razonamiento y, por ende, debe calificarse como inoperante; sin que sea dable entrar a su estudio so pretexto de la causa de pedir, ya que ésta se conforma de la expresión de un hecho concreto y un razonamiento, entendido por éste, cualquiera que sea el método argumentativo, la exposición en la que el quejoso o recurrente realice la comparación del hecho frente al fundamento correspondiente y su conclusión, deducida del enlace entre uno y otro, de modo que evidencie que el acto reclamado o la resolución que

JUICIO DE AMPARO 1200/2020

b. *Jurisdiccional*: interviene en los términos de ley, en los procedimientos de responsabilidad de servidores públicos;

c. *De investigación*: las que se creen en los términos del párrafo final del artículo 93 constitucional”.

En ese contexto, en lo que aquí importa el artículo 90 precisa cuáles serán las comisiones ordinarias:

“ARTICULO 90.

1. Las comisiones ordinarias serán las de:

I. Administración;

II. Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural;

III. Asuntos Indígenas;

IV. Biblioteca y Asuntos Editoriales;

V. Comercio y Fomento Industrial;

VI. Comunicaciones y Transportes;

VII. Defensa Nacional;

VIII. Derechos Humanos;

IX. Desarrollo Social;

X. De la Ciudad de México;

XI. Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología;

XII. Energía;

XIII. Estudios Legislativos;

XIV. Federalismo y Desarrollo Municipal;

XV. Gobernación;

XVI. **Hacienda y Crédito Público;**

XVII. Jurisdiccional;

XVIII. Justicia;

XIX. Marina;

XX. Medalla Belisario Domínguez;

XXI. Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca;

XXII. Para la Igualdad de Género

XXIII. Puntos Constitucionales;

XXIV. Reforma Agraria;

XXV. Reglamentos y Prácticas Parlamentarias;

XXVI. Relaciones Exteriores;

XXVII. Salud y Seguridad Social;

XXVIII. Seguridad Pública

XXIX. Trabajo y Previsión Social,

XXX. Turismo”.

Además, el artículo 117, del Reglamento del Senado de la República norma lo siguiente:

“117

1. Las comisiones ordinarias elaboran dictámenes, informes y opiniones respecto de los asuntos que se les turnan; y ejercen las facultades de información, control y evaluación que les corresponden.

2. Las **competencias** de las comisiones ordinarias **conciernen en lo general a sus respectivas denominaciones**; en su caso, corresponden a las atribuidas a cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los órganos autónomos o cualquier otro ente público según el instrumento de su creación”.

Con relación a lo asentado se estima pertinente hacer referencia a la exposición de motivos del decreto tachado de inconstitucional:

“Antecedentes

El Fideicomiso es un contrato por virtud del cual una persona física o moral denominada fideicomitente, transmite y destina determinado patrimonio (bienes o derechos) a una-institución fiduciaria a quien se le encomienda la realización de fines determinados y lícitos en beneficio de una tercera persona o en su propio beneficio.

Al tratarse de un derecho de propiedad basado en la confianza, en México la regulación de los fideicomisos se incorporó en el ámbito del derecho privado, como un contrato jurídico de carácter mercantil y financiero.

La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y la Ley de Instituciones de Crédito establecen disposiciones de confidencialidad, a través del secreto bancario, respecto de los actos que derivan de las operaciones financieras para proteger los datos y la privacidad de sus usuarios.

Si bien ahora los fideicomisos están regulados por otros instrumentos jurídicos, el origen de sus operaciones se asienta en disposiciones financieras y mercantiles por lo que se han generado ambigüedades interpretativas, lagunas jurídicas, antinomias jurídicas y la aplicación discrecional de las leyes.

Por lo que, son herramientas financieras constituidas por instituciones privadas y públicas, cuya estructura y regulación dificultan el rastreo de los recursos. Sobre la naturaleza del fideicomiso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que es un negocio jurídico por medio del cual el fideicomitente constituye un patrimonio fiduciario autónomo, cuya titularidad se concede a la institución fiduciaria para la realización de un fin determinado.

Es decir, el patrimonio fiduciario autónomo es afectado a un cierto fin y bajo la titularidad y ejecución del fiduciario, pero que es diverso de los patrimonios del fideicomitente, del fiduciario y del fideicomisario.

Argumentación

Los fideicomisos públicos fueron concebidos para auxiliar al gobierno en la administración de recursos públicos bajo los

sesión del martes veinte de octubre, esto es que se citó minutos después de que éste fuera aprobado por la Comisión.

Se colige de esa manera porque la Comisión aludida es la competente y responsable de guiar los trabajos relacionados con la minuta que le fue turnada, a más que los vicios de los que se duele la quejosa no trascienden de modo fundamental a la norma con la que culminó el procedimiento legislativo, en razón que este tipo de requisitos tiende a facilitar el análisis, discusión y aprobación de los proyectos de ley por el Pleno del Congreso, de modo que si éste aprueba la ley, observando las formalidades trascendentes para ello, su determinación no puede verse alterada por irregularidades de carácter secundario.

Al respecto se estima aplicable la jurisprudencia P./J. 94/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:³¹

“VIOLACIONES DE CARÁCTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SON IRRELEVANTES SI NO TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA. Dentro del procedimiento legislativo pueden darse violaciones de carácter formal que trascienden de manera fundamental a la norma misma, de tal manera que provoquen su invalidez o inconstitucionalidad y violaciones de la misma naturaleza que no trascienden al contenido mismo de la norma y, por ende, no afectan su validez. Lo primero sucede, por ejemplo, cuando una norma se aprueba sin el quórum necesario o sin el número de votos requeridos por la ley, en cuyo caso la violación formal trascendería de modo fundamental, provocando su invalidez. En cambio cuando, por ejemplo, las comisiones no siguieron el trámite para el estudio de las iniciativas, no se hayan remitido los debates que la hubieran provocado, o la iniciativa no fue dictaminada por la comisión a la que le correspondía su estudio, sino por otra, ello carece de relevancia jurídica si se cumple con el fin último buscado por la iniciativa, esto es, que haya sido aprobada por el Pleno del órgano legislativo y publicada oficialmente. En este supuesto los vicios cometidos no trascienden de modo fundamental a la norma con la que culminó el procedimiento legislativo, pues este tipo de requisitos tiende a facilitar el análisis, discusión y aprobación de los proyectos de ley por el Pleno del Congreso, por lo que si éste aprueba la ley, cumpliéndose con las formalidades trascendentes para ello, su determinación no podrá verse alterada por irregularidades de carácter secundario”.

³¹ Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo XIV, Agosto de 2001, página 438. Materias(s): Constitucional. Registro digital: 188907.

En ese contexto, el proceso legislativo sí atendió los principios básicos, toda vez que la iniciativa fue turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, quien emitió su dictamen y fue publicado en la Gaceta Parlamentaria de esa Cámara.

El seis de octubre de dos mil veinte, el Pleno de dicho órgano discutió el dictamen, sesión en la que los representantes de los partidos políticos ejercieron el uso de la palabra, sometiendo a discusión y votación el referido dictamen. Concluida en sus términos esta fase, la Cámara de origen envió a la Cámara de Senadores la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones relativas a fideicomisos públicos.

En ese orden, la Cámara revisora turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda para su estudio, análisis y dictamen. Posteriormente, la Comisión competente emitió su dictamen el cual fue publicado en la Gaceta del Senado y en sesión de veinte de octubre de dos mil veinte sometió a discusión del Pleno el dictamen en cita; sesión en la que los representantes de los partidos políticos ejercieron el uso de la palabra, sometiendo a votación el referido dictamen.

Aprobado el proyecto se remitió al ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Bajo tales postulados, el Decreto tachado de inconstitucional no vulnera el principio de debido proceso legislativo amen que de éste fue aprobado y finalmente publicado en el Diario Oficial de la Federación.

En ese contexto, se declara **infundado** el argumento en el que expone que si bien la Comisión de Hacienda y Crédito Público habría aprobado el dictamen en cuestión el lunes diecinueve de octubre, no así la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, al no lograr el quórum requerido, dado que esta última aprobó el dictamen hasta el día martes veinte de octubre, a las 17:36 horas, conforme a lo reportado en la cuenta institucional del Senado Mexicano en la red social "*Twitter*", por lo que fue hasta ese momento que sería posible su remisión a la Mesa Directiva del Senado de la República. La inoperancia de este argumento radica en que



JUICIO DE AMPARO 1200/2020

la naturaleza de tales publicaciones únicamente acreditan que aquellas tuvieron realización en el modo, tiempo y lugar que de las mismas aparezca, pero ello no involucra que sean aptas para demostrar los hechos que en tales publicaciones se contengan, pues no reúnen las características de documento público, de ahí que, carezcan de valor probatorio pleno.

Resulta aplicable la tesis I.4o.T.5 K de los Tribunales Colegiados de Circuito:³³

“NOTAS PERIODISTICAS, INEFICACIA PROBATORIA DE LAS. *Las publicaciones en los periódicos únicamente acreditan que tuvieron realización en el modo, tiempo y lugar que de las mismas aparezca, mas en forma alguna son aptas para demostrar los hechos que en tales publicaciones se contengan, pues no reúnen las características de documento público a que se refiere el artículo 795 de la Ley Federal del Trabajo, ni tampoco puede ser considerado como documental privada conforme a los artículos 796 y 797 del propio ordenamiento legal, en cuyo caso surge la posibilidad de formular las objeciones respectivas; consecuentemente, el contenido de una nota periodística, -generalmente redactada y dada a conocer por profesionales de la materia, cuyas fuentes no son necesariamente confiables, amén de que cabe la posibilidad de que sean producto de la interpretación e investigación personal de su autor- no puede convertirse en un hecho público y notorio, pues aunque aquella no sea desmentida por quien puede resultar afectado, el contenido de la nota solamente le es imputable al autor de la misma, mas no así a quienes se ven involucrados en la noticia correspondiente”.*

Asimismo, resulta **infundado** que en la Cámara de Senadores no hubo intercambio de opiniones, argumentos y comentarios que exigen los artículos 183 y 185 del Reglamento del Senado de la República.³⁴

³³ Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, Diciembre de 1995, materia común, página: 541. Registro: 203623.

³⁴ “183

1. Inmediatamente después de que se recibe una iniciativa o proyecto, los presidentes de las comisiones respectivas lo hacen del conocimiento de sus integrantes para recabar sus comentarios y propuestas, con la finalidad de proceder a dictaminar.
2. La Junta Directiva de la comisión coordinadora, en consulta con las de las otras comisiones dictaminadoras, acuerda la organización y el método de trabajo para el estudio de los asuntos y la elaboración de los proyectos de dictamen correspondientes.
3. Cuando es procedente se consideran otras iniciativas y proyectos relacionados que están pendientes de dictaminar, siempre que traten los mismos tema y materia.
4. Al dictaminar los proyectos enviados por la Cámara de Diputados no se acumulan iniciativas presentadas en el Senado como Cámara de origen”.

“185

1. La comisión que coordina los trabajos correspondientes acuerda con la opinante el plazo para emitir la opinión. En todo caso, la opinión se remite a la comisión coordinadora antes de que se elabore el dictamen, mismo que debe incluir las consideraciones respectivas y dar cuenta de los puntos de vista aportados.
2. La opinión es aprobada por la mayoría de los miembros de la comisión que la emite.
3. La opinión es analizada en el dictamen, independientemente de su carácter no vinculatorio.
4. Para su publicación conjunta, las comisiones anexan al dictamen copia de la opinión recibida”.

JUICIO DE AMPARO 1200/2020

Encuentro social
Sasil de León Villard

Partido del Trabajo
Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre
Miguel Ángel Lucero Olivas
Nancy De la Sierra Arámburo

Partido Verde Ecologista
María Leonor Noyola Cervantes
Verónica Noemí Camino Farjat
Raúl Bolaños Cacho Cué
Gabriela Benavides Cobos

Partido Acción Nacional
Germán Martínez Cázares
Minerva Hernández Ramos
Kenia López Rabadán
Raúl Paz Alonzo
Xóchitl Gálvez Ruíz
Julen Rementería del Puerto
Damián Zepeda Vidales
José Erandi Bermúdez Méndez
Mayuli Latifa Martínez Simón
Alejandra Noemí Reynoso Sánchez
Gina Andrea Cruz Blackledge
María Guadalupe Murguía Gutiérrez
Antonio Martín del Campo Martín del Campo
Martha Cecilia Márquez Alvarado
Gustavo Madero Muñoz
Gloria Elizabeth Núñez Sánchez
Josefina Eugenia Vázquez Mota
Víctor Oswaldo Fuentes Solís

Movimiento Ciudadano
Dante Delgado Rannauro
Samuel Alejandro García Sepúlveda

Verónica Delgadillo García
Dora Patricia Mercado Castro
Juan Zepeda Hernández

Asimismo, se obtiene que el debate inició y concluyó de la forma siguiente:

"El Senador Alejandro Armenta Mier: Muchas gracias, señor presidente.

Muy buenas tardes, noches, Senadoras y Senadores.

A las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, nos fue turnado el pasado 15 de octubre para su análisis el dictamen de una minuta que tiene como objeto eliminar la opacidad y la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos y fomentar la transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad mediante la modificación a 18 leyes, y la abrogación de dos leyes cuya aprobación implicaría la extinción de diversos fideicomisos.

Se propone ordenar el funcionamiento de la Administración Pública, así como su régimen transitorio. Existen actualmente 332 fideicomisos y con este dictamen se extinguirán 107 fideicomisos, que permitirán una bolsa superior a los 68 mil millones de pesos, que, en condiciones actuales, producto del Covid, serán sin duda recursos fundamentales para atender esta pandemia.

El fideicomiso público no es la panacea, no es el motivo de la Administración Pública, el fideicomiso es un instrumento utilizado recientemente para desahogar tareas paralelas en la Administración Pública.

Quienes conocemos la administración sabemos que ésta, en su régimen central y descentralizado tiene, como propósitos fundamentales, los quehaceres del Estado mexicano.

No es un fideicomiso público el argumento suficiente para decir que una tarea o una labor de Estado o de gobierno se deja de hacer. Por eso vale la pena hacer un recorrido.

Se crearon fideicomisos, como el Proyecto Playa Espíritu en Sinaloa, en el cual Fonatur invirtió mil 400 millones de pesos y hasta la fecha no se ha podido vender un solo lote.

En materia de ciencia se creó un gran proyecto del inodoro inteligente, que costó cerca de dos millones de pesos que resultó que ya existía en el mercado, incluso con mejores características.

El Conacyt, por poner un ejemplo, tuvo más de siete mil millones de pesos de desvío de fondos públicos acreditados en la Auditoría Superior de la Federación.

En el cine se realizaron festivales, dando premios a personas cercanas a los directores y los estímulos se concentraban en las mismas productoras y en las películas.

En las anteriores administraciones, el Fonca solo benefició con más de 400 millones de pesos a 444 creadores, pero de esta lista aparecen familiares, colegas que mantienen becas vitalicias del gobierno federal.

Durante los sismos del 2017, los recursos del Fonden fueron recurrentes en materia de deficiencia. Hoy la Secretaría de Hacienda señala que hay pasivos por más de siete mil millones de pesos por el Fonden.

En el 2018 se aprobaron, para atender los daños ocasionados por las inundaciones, en Sinaloa, recursos que hasta la fecha no han podido cumplir con la comprobación correspondiente.

Mexicanas y mexicanos, les decimos con claridad: "No se pueden dejar engañar, la eliminación de los fideicomisos no significa que se acaben los apoyos a los deportistas, a los cineastas, a los científicos".

Estamos a favor de las víctimas, a favor de los periodistas, a favor de la gente que más lo necesita. Lo que se va a acabar hoy es el arte de desaparecer el dinero público, eso es lo que se va a acabar con la extinción de los fideicomisos públicos.

Quiero concluir con una referencia de la que tengo testimonio. Se abusó de los fideicomisos a partir del 2000, la industria facturera, la industria de las empresas fantasmas y los fideicomisos nacieron en el 2000, cuando las leyes de ingresos que se fueron planeando del 2000, al 2018 significaron una fuente de saqueo, que significó al 2018, 3.8 billones de pesos que no se acreditaron en la Ley de Ingresos de la Federación, pero que sí se destinaba a fideicomisos públicos en un 70 %.

Así nace, en México, el sistema de saqueo fiscal y presupuestal que se crea con los fideicomisos públicos que genera una industria que desdobra empresas fantasmas y que emite, durante todo este período, nueve millones de facturas apócrifas. Hoy concluye esa fase de saqueo en nuestro país, por eso acompañamos al presidente de la República en esta propuesta a favor de la transparencia en nuestro país.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar: Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Ana Lilia Rivera Rivera, de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.

La Senadora Ana Lilia Rivera Rivera: Honorable Asamblea.

(...)



“CONFIANZA LEGÍTIMA. SU APLICACIÓN EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO RESPECTO DE ACTOS LEGISLATIVOS. *La figura de mérito, en relación con el tipo de actos referidos, debe invocarse bajo la perspectiva de irretroactividad de las normas consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque pretender tutelar meras expectativas de derecho contra los actos legislativos equivaldría a la congelación del derecho, a su inmovilización total o parcial y el consecuente cierre definitivo a los cambios sociales, políticos o económicos, lo cual sería contrario al Estado de derecho democrático y a la facultad que, en éste, tiene el legislador de ajustar la norma a las cambiantes necesidades de la sociedad y de la realidad. Además, específicamente en el ámbito tributario, su diseño por vía de leyes es facultad del Congreso de la Unión y, por ende, conlleva un margen amplio de libertad de configuración, de modo que no existe un derecho constitucionalmente tutelado para que el sistema tributario permanezca inmodificable y estático, sino por el contrario resulta indispensable para el poder público adaptar la normativa fiscal al contexto económico, tanto nacional e internacional, así como a las necesidades públicas. Aunado a ello, la modificación de las normas tributarias tiene, por regla general, un fin de interés público que es preponderante al interés particular de cada contribuyente, pues con base en el principio de generalidad tributaria se tutela el interés del Estado en la percepción de ingresos, que es un interés público encaminado a atender necesidades sociales relevantes con amplio respaldo o tutela constitucional, así como la necesidad de basar la contribución de los ciudadanos para sostener los gastos públicos en criterios de solidaridad. Por tanto, la confianza legítima no tiene el alcance de oponer al legislador meras expectativas de derecho para cuestionar la regularidad constitucional de los actos en los que se determina el establecimiento, modificación o supresión de regulaciones en materia de contribuciones, debido a la imposibilidad del contribuyente de contar con la esperanza de que una tasa, tarifa e incluso un régimen de tributación permanezcan inmodificables hacia el futuro”.*

De igual manera no le asiste razón a la quejosa cuando sostiene que con la emisión del decreto impugnado se anula la posibilidad de captar y canalizar recursos financieros públicos, privados, nacionales e internacionales para apoyar la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático, toda vez que conforme al artículo 81 de la Ley General de Cambio Climático los recursos para apoyar la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático serán:

“81. Las fuentes de financiamiento para apoyar la implementación de acciones para enfrentar los efectos adversos del cambio climático serán las siguientes:



fondos y fideicomisos, que no existe una proporcionalidad legislativa ni se razona cómo el fin a cumplirse por las iniciativas dictaminadas es mayor a cualquier posible afectación.

Los razonamientos esbozados son **infundados**, pues como lo ha sostenido el Alto Tribunal la fundamentación y motivación de los actos de la autoridad legislativa se satisfacen cuando la autoridad que expide la ley actúa dentro de las atribuciones constitucionalmente conferidas (fundamentación) y cuando las leyes que emite se refieran a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación), sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran los ordenamientos deban ser necesariamente materia de una motivación específica; más aún cuando no se está en el supuesto de que se deba llevar a cabo una motivación reforzada, ya que en el caso no se presenta una categoría sospechosa que lo amerite.

En apoyo, se cita la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:³⁹

“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA. Este Tribunal Pleno ha establecido que por fundamentación y motivación de un acto legislativo, se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente esté facultado para ello, ya que estos requisitos, en tratándose de actos legislativos, se satisfacen cuando actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución correspondiente le confiere (fundamentación), y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivación específica”.

En suma se invoca la siguiente tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como criterio orientador y complementaria a la antes transcrita:⁴⁰

“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS LEGISLATIVOS. LOS PODERES QUE INTERVIENEN EN SU FORMACION NO ESTAN OBLIGADOS A EXPLICARLOS. Ni el Congreso de la Unión ni el presidente

³⁹ Visible en el Semanario Judicial de la Federación. Séptima Época. Volumen 181-186, Primera Parte, página 239. Materias(s): Constitucional, Común. Registro digital: 232351

⁴⁰ Publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Séptima Época. Volumen 77, Primera Parte, página 19. Materias(s): Constitucional. Registro digital: 232883.



Sin embargo, precisa que a lo largo los años, **el manejo y administración de algunos fideicomisos no ha sido la consecución de su fines de creación, ni la transparencia, ni el uso adecuado de los recursos públicos**; al efecto menciona que aún y cuando desde mil novecientos noventa y siete se estableció en la Ley de Ingresos la obligación de registrar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, todos los fideicomisos, mandatos y contratos análogos en los que el gobierno federal intervenga, de acuerdo con la Encuesta de Presupuesto Abierto, en dos mil diecisiete México había mostrado avances en transparencia presupuestaria pese a ello, en lo que relativo a los fideicomisos públicos México obtuvo una calificación de 39 de 100, es decir, no había mejorado su nivel de transparencia respecto a los fideicomisos públicos considerados no entidad paraestatal.

Robusteció su explicación, cuando acotó que la dimensión del problema se entendía mucho mejor al revisar los montos que actualmente concentran los fideicomisos públicos, con base en los datos de FUNDAR (2018) cuyo monto total de recursos públicos disponibles en 374 fideicomisos asciende a 835,477 millones de pesos, que equivalen al 15.80/o de todo el presupuesto de 2018. Esto es, el 92% de estos recursos, (772,063 millones de pesos), se concentran en fideicomisos considerados No Entidad Paraestatal, lo cual conlleva amplios riesgos de **opacidad** ya que no cuentan con suficientes mecanismos de control interno.

Por lo que enfatizó que esa cuantiosa suma ha sido acumulada en los fideicomisos públicos porque en los últimos años se ha aprobado un aumento significativo y consistente de estos recursos y, sobre todo, porque lo que se ejerce sobrepasa por mucho lo aprobado.

A manera de ejemplo refirió que en el año dos mil dieciséis, de los \$214, 135 millones de pesos ejercidos, sólo \$65,867 millones de pesos se habían aprobado, o sea, se ejerció un monto tres veces superior al estipulado, sin que esté disponible ninguna explicación o justificación sobre de la racionalidad detrás de estas decisiones.

Ante tales premisas estimó que los fideicomisos que **no** son entidades paraestatales han permanecido en la opacidad, lo cual es

Conforme a lo expuesto, es claro que la responsable cumplió el deber que le impone el artículo 16 constitucional, pues tiene facultades para emitir actos como el reclamado y no sólo existen las relaciones sociales que reguló, sino que también justificó y explicó que con motivo a la opacidad, la falta de transparencia y la rendición de cuentas de diversos fideicomisos públicos sin estructura, resultaba pertinente extinguir algunos de ellos.

Máxime que dicha medida tiene injerencia en el ramo económico, pues establece que de aprobarse la iniciativa, sería posible reasignar recursos para la Federación hasta por 36 mil 058 millones de pesos.

“D. IMPACTO PRESUPUESTARIO

Con el objetivo de tener una valoración del impacto presupuestario de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de la Ley de Hidrocarburos, de la Ley de la Industria Eléctrica, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, de la Ley Federal de Derechos, de la Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley Aduanera, de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, de la Ley Federal de Cinematografía, y se abroga la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, esta Comisión solicitó la asesoría del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP).

*El Centro estima que, de aprobarse, esta Iniciativa **no generaría un impacto presupuestario**, ya que solo se trata de reasignar recursos que ya existen en el Presupuesto de Egresos de la Federación o en las disponibilidades de los entes a cargo de los fondos y fideicomisos.*

El CEFP para su análisis considera que esta Iniciativa se inscribe en el contexto del Decreto por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos que el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 2 de abril de 2020. En el decreto, se establecía como plazo para la extinción o liquidación de los fideicomisos y el traspaso de sus activos a la SHCP el 15 de abril pasado; por ello, podría resultar que algunos de los fideicomisos o jeto de la Iniciativa en análisis ya se hayan extinguido, reorganizado o la dependencia coordinadora haya emitido argumentos para justificar su permanencia y operación.

Finalmente concluye que la extinción de los Fondos y Fideicomisos identificados en la Iniciativa de mérito, no representaría erogaciones adicionales, dado que ya cuenta con una fuente de recursos, ya sea presupuestales,

sentido, esos métodos no constituyen, por sí mismos, un derecho fundamental, sino la vía para que los Jueces cumplan la obligación que tienen a su cargo, que se constriñe a decidir, en cada caso particular, si ha existido o no la violación alegada. Sobre esas bases, los Jueces no están obligados a verificar la violación a un derecho humano a la luz de un método en particular, ni siquiera porque así se lo hubieran propuesto en la demanda o en el recurso, máxime que no existe exigencia constitucional, ni siquiera jurisprudencial, para emprender el test de proporcionalidad o alguno de los otros métodos cuando se alegue violación a un derecho humano.

Por otra parte, el **cuarto concepto de violación** formulado resulta **inoperante**, ya que manifiesta que se vulnera el artículo 134 constitucional, toda vez que los artículos cuarto, quinto y sexto transitorios, hacen un redireccionamiento discrecional, cuyo margen es amplio y puede utilizarse de manera indebida.

Para demostrar lo anterior, se debe hacer hincapié en que si bien la claridad de las disposiciones de observancia general constituye un imperativo a seguir, con el objeto de evitar su ambigüedad, confusión o contradicción, también es cierto que ningún artículo constitucional exige la definición de cada concepto que se haya empleado en la formulación de aquéllas, en vista de que ello implicaría una labor interminable e impráctica, lo cual a su vez tendría como consecuencia que no se cumpliera oportunamente con la finalidad de regular las relaciones humanas.

Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 11//2007, de rubro: **“LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO DEPENDE DE LOS VICIOS EN LA REDACCIÓN E IMPRECISIÓN DE TÉRMINOS EN QUE EL LEGISLADOR ORDINARIO PUEDA INCURRIR.”**⁴⁴

Cuestión la anterior que no puede servir de base para declarar la inconstitucionalidad de las disposiciones transitorias combatidas, ya que la promovente sustenta su argumento en la situación hipotética, pues a su parecer la facultad discrecional a que hace referencia, puede utilizarse de manera indebida, lo que evidencia lo hipotético de esa situación, y que no conduce necesariamente a sostener que por ello la normatividad reclamada resulta inconstitucional.

⁴⁴ Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, septiembre de 2007, página 267. Registro IUS: 171433.



palabra está utilizada como la facultad que le asiste a una persona y, la segunda, alude a que la única propiedad que ha de satisfacerse para ser titular de estos derechos es la de pertenecer a los seres humanos, lo que significa que excluye a las personas morales.

No es ajeno para este juzgador la jurisprudencia P./J. 1/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no obstante, como ahí se precisa las personas morales, gozarán de aquellos derechos en la medida en que resulten conformes con su naturaleza y fines. El rubro y texto son:⁴⁷

“PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. ES APLICABLE RESPECTO DE LAS NORMAS RELATIVAS A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS QUE SEAN TITULARES LAS PERSONAS MORALES.

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en dicha Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, no prevé distinción alguna, por lo que debe interpretarse en el sentido de que comprende tanto a las personas físicas, como a las morales, las que gozarán de aquellos derechos en la medida en que resulten conformes con su naturaleza y fines. En consecuencia, el principio de interpretación más favorable a la persona, que como imperativo establece el párrafo segundo del citado precepto, es aplicable respecto de las normas relativas a los derechos humanos de los que gozan las personas morales, por lo que deberán interpretarse favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia, a condición de que no se trate de aquellos derechos cuyo contenido material sólo pueda ser disfrutado por las personas físicas, lo que habrá de determinarse en cada caso concreto”.

En el **sexto** y **séptimo** concepto de violación la moral quejosa refiere que la desaparición del fondo para el cambio climático es una medida regresiva que atenta contra el principio de progresividad.

Son **infundados** los conceptos de violación, pues con la publicación de decreto impugnado, el objeto de la Ley General de Cambio Climático, no fue reformado, adicionado, derogado o abrogado, el cual se transcribe para pronta referencia.

⁴⁷ Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Libro 16, Marzo de 2015, Tomo I. página 117. Materias(s): Constitucional. Registro digital: 2008584



JUICIO DE AMPARO 1200/2020

(ADICIONADO, D.O.F. 6 DE NOVIEMBRE DE 2020)

Respecto de la aplicación de los recursos se dará prioridad a las acciones relacionadas con la Adaptación”.

A partir de lo anterior, contrariamente a lo afirmado por la quejosa el decreto reclamado no transgrede el derecho a un medio ambiente sano y, en vía de consecuencia, no existe una transgresión al principio de progresividad, el cual es reconocido en el artículo 1o. de la Constitución, y que dispone que todas las autoridades del país, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen la obligación de desarrollar gradualmente el contenido y alcance de los derechos humanos reconocidos constitucionalmente y en los tratados internacionales de los que el país es parte, así como prohibido adoptar medidas regresivas. Este desarrollo progresivo de los derechos humanos puede ser realizado no sólo a través de medidas legislativas específicamente constitucionales, sino también a través de la legislación secundaria, de actos de la administración e incluso de las autoridades jurisdiccionales, pues la norma constitucional impone esa obligación a todas las autoridades del Estado, en el ámbito de sus competencias.

La Primer Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación menciona que es posible diseccionar este principio en varias exigencias de carácter tanto positivo como negativo, dirigidas a los creadores de las normas jurídicas y a sus aplicadores, con independencia del carácter formal de las autoridades respectivas, ya sean legislativas, administrativas o judiciales, a saber:

a) **En sentido positivo**, del principio de progresividad derivan para el legislador (sea formal o material) la obligación de **ampliar** el alcance y la tutela de los derechos humanos; y para el aplicador, el deber de interpretar las normas de manera que se amplíen, en lo posible jurídicamente, esos aspectos de los derechos.

b) **En sentido negativo**, impone una prohibición de regresividad, o sea, el legislador tiene prohibido, en principio, emitir actos legislativos que limiten, restrinjan, eliminen o desconozcan el alcance y la tutela que en determinado momento ya se reconocía a los derechos humanos, y el aplicador tiene prohibido interpretar las normas sobre derechos humanos de manera regresiva, esto es, atribuyéndoles un sentido que implique

desconocer la extensión de los derechos humanos y su nivel de tutela admitido previamente.

También, precisa que en congruencia con este principio, el alcance y nivel de protección reconocidos a los derechos humanos tanto por la Constitución como por los tratados internacionales, deben ser concebidos como un mínimo que el Estado Mexicano tiene la obligación inmediata de respetar (no regresividad) y, a la vez, el punto de partida para su desarrollo gradual (deber positivo de progresar).

Lo anterior se deduce de la Jurisprudencia 1a./J. 85/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: **“PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU CONCEPTO Y EXIGENCIAS POSITIVAS Y NEGATIVAS”**.⁴⁸

Entonces, bajo esa óptica es **infundado** que el Decreto reclamado rebase el principio de progresividad, pues con su emisión no se limitó, restringió, eliminó o desconoció el alcance y la tutela a un medio ambiente sano, ni desconoció la existencia de los derechos humanos y su nivel de tutela admitido previamente, conforme a lo estatuido en el artículo 2° de la Ley General de Fondo Climático.

Consecuentemente, ante lo **infundado e inoperante** de los motivos de desenso abordados en este considerando, lo conducente es negar el amparo solicitado.

Por lo expuesto y fundado, se **resuelve**:

ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *****
 ***** ** ***** ***** ***** ***** , por conducto de
 ***** ***** ***** ***** en contra del acto precisado en el
 considerando tercero y por las razones expuestas en el **último**
 considerando de esta sentencia.

Notifíquese; personalmente quejosa y a las demás partes como en derecho corresponda.

⁴⁸ Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Libro 47, Octubre de 2017, Tomo I, página 189. Materias(s): Constitucional. Registro digital: 2015305.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:
15396308_0727000027443411024.p7m
Autoridad Certificadora:
Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 2

FIRMANTE				
Nombre:	HAYDE ILIANA ARGUETA RODRIGUEZ	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e5.b6	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	31/08/21 01:48:48 - 30/08/21 20:48:48	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	31 d4 6f 4a a9 73 c4 de 88 83 07 41 56 f8 19 7b e5 98 ae 0b 20 cb e3 65 bb 0a 07 53 40 5b 22 b6 d9 01 a4 9c 6f fc 0b ce 03 84 c8 ba 36 e0 00 c8 69 b5 80 23 8a 4c a7 af 3f f3 c0 ff 0c 2e 8a 85 a8 4e c5 0b c6 f8 0b f4 b9 7f 56 e4 5d 5e 74 77 96 49 62 bb 5b 24 5f 7a af e9 b6 e9 f9 32 05 33 41 19 cf a2 00 14 d8 be 2a 11 e2 68 e9 2c 05 d8 ee 20 b0 ba 09 5c 15 bb f7 02 c2 4e f1 e1 2e 5e 8d 84 08 09 05 d6 f7 13 dc 4f f3 f2 f1 47 60 b9 6a 7e 90 7d 1e 15 54 02 36 2b 1e bc 97 67 42 4c af c5 86 08 d1 2b bf 80 ba 11 bf 8b 81 09 a2 98 82 7a 7c f8 f6 31 7f 36 ce 53 99 42 a3 f4 7a f8 f6 04 b1 97 e4 86 87 2c 2f 9a e0 18 7c 6b 75 34 5f 4b 05 9b e5 92 e4 d0 35 bf 90 1d ca 68 dc 61 de da 49 84 9f 64 db 9b 35 5d 1b 77 9d db 48 d4 3a 9f 49 42 b1 16 fd af 4f 05 23 c4 7a b8 08 ec			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	31/08/21 01:48:48 - 30/08/21 20:48:48			
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.03			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	31/08/21 01:48:48 - 30/08/21 20:48:48			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	68419972			
Datos estampillados:	nJWz46wk+cvJBzpl7b5MrbRimvs=			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	JUAN CARLOS GUZMÁN ROSAS	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.01.70.0d	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	31/08/21 03:40:36 - 30/08/21 22:40:36	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	0e 20 a6 b5 80 20 b9 30 b7 e5 fb 5b bf fb d7 2b f8 3d b4 4f 6e fd 78 90 93 68 7a 4c a8 ac 3d 35 83 06 ba ef 30 fa 91 af d8 51 af ff d6 27 98 f7 82 1f dd 38 b8 36 fb 0b 69 40 9f dd ef ed f9 08 d1 2f 5e f3 e2 a0 08 62 44 fc ba cc 58 20 c0 98 f6 8f 64 49 45 6f a5 a9 e6 22 c0 40 a7 54 b5 43 48 31 b8 4e f8 73 08 55 03 bb 86 cf 31 6b 80 55 be b7 98 9a 87 12 8f 25 a0 98 c6 b5 1a b3 76 6d c4 29 85 9f 58 91 71 ac 7a 49 23 0d 22 5f 81 f0 e1 f6 f2 2d b8 d0 92 20 2b 6e 59 13 f0 9f 47 b0 a2 30 1b c3 1b 79 d8 b0 e2 ad 34 e3 ae 4b ff 2d 3f f8 66 43 b2 8f eb 99 5e 1e 08 6e d2 e1 49 b4 0a 70 d8 4f 1b fe 0b 18 05 73 1a ef fb c2 22 ae 89 3e cb 98 03 ec d8 e5 38 81 e0 24 e0 1e d1 20 e3 3e 7b aa d5 b6 1a d5 06 83 1a 83 90 29 34 0a 6d 5b 66 7a fc 63 b4 dc fe e9 3e 71 70 06 88 1b			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	31/08/21 03:40:37 - 30/08/21 22:40:37			
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.03			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	31/08/21 03:40:37 - 30/08/21 22:40:37			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	68441011			
Datos estampillados:	vSov3uT1uSBZKF/BCvRNka4HoGc=			

El treinta de agosto de dos mil veintiuno, la licenciada Haydé Iliana Argueta Rodríguez, Secretario(a), con adscripción en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, hago constar y certifico que en esta versión pública no existe información clasificada como confidencial o reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Conste.

PJF - Versión Pública